


Bogotá, D. C. 04 de junio de 2024

 Grupo Energía Bogotá	GEB-50020205_00381-2024-S
04/06/2024 10:37	

Doctora

Susana Muhamad González

MINISTRA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

info@minambiente.gov.co

Calle 37 No. 8 - 40

Ciudad

Asunto: Reiteración derecho de petición – Solicitud pronunciamiento de fondo en trámites de sustracción de áreas - Proyectos de transmisión UPME 03-2010 Chivor Norte 230 kV y UPME 01-2013 Sogamoso 500kV.

Referencia: Expedientes SRF 395, SRF 679 y SRF 649.

Respetada Sra. Ministra:

Hemos recibido la comunicación con radicado 21022024E2012013, del 17 de abril de 2024, mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, a través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, informa que “*se encuentra realizando las actividades necesarias para avanzar en el proceso de trámite y poder brindar una respuesta*” a las solicitudes de sustracción de reserva correspondientes a los expedientes SRF 395, SRF 679 y SRF 649. Teniendo en cuenta los antecedentes, las solicitudes efectuadas, el contenido de los trámites adelantados y los tiempos que hasta ahora se han tomado las autoridades, el Grupo Energía Bogotá -GEB- considera que el contenido de dicha comunicación no da una respuesta completa y de fondo y, en consecuencia, no cumple con el núcleo de las peticiones elevadas, y en tal sentido, se afectan, entre otros, el derecho fundamental de petición del GEB, y otros derechos individuales y colectivos de la empresa y de los usuarios del servicio público esencial de transmisión de energía eléctrica.

La falta de un pronunciamiento de fondo y la no resolución completa y oportuna de los trámites de sustracción requeridos, los cuales fueron iniciados por GEB con el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, está afectando sin razón alguna la ejecución y puesta en operación de los proyectos UPME 03-2010 (Norte-Chivor) y UPME 01-2013 (Sogamoso), considerados como de Interés Nacional y Estratégico (PINES), conforme los criterios del CONPES 3762 de 2013. En particular, la mora en los trámites de sustracción, objeto de la petición que estamos reiterando, imposibilita -sin razón alguna- la construcción de **193 torres sin las cuales los proyectos no lograrían la funcionalidad para la que fueron concebidos.** Esta situación constituye una amenaza latente para la seguridad energética de la zona centro oriental del país, causando perjuicios al sistema eléctrico colombiano y a GEB en su calidad de ejecutor del proyecto.

Con el propósito de precisar las afirmaciones precedentes, la reiteración de nuestra petición se desarrolla de la siguiente manera: (i) la importancia estratégica de los Proyectos UPME 03-2010 (Norte-Chivor) y UPME 01-2013 (Sogamoso); (ii) las consecuencias adversas para el sistema eléctrico y para el GEB por la omisión de respuesta por parte de la Autoridad; (iii) el derecho de petición no ha sido resuelto conforme a las exigencias identificadas por la jurisprudencia; y (iv) la reiteración de la solicitud y peticiones derivadas de la misma.

I. LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS UPME 03-2010 (NORTE-CHIVOR) Y UPME 01-2013 (SOGAMOSO).

1.1. Carácter esencial del servicio público de transmisión de energía y expansión del Sistema de Transmisión Nacional - STN

La **transmisión** de energía eléctrica está destinada a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente, y, por esta razón es considerada como parte de la cadena de un servicio público de carácter esencial, obligatorio, solidario y de utilidad pública (artículo 5° de la Ley 143 de 1994)¹. Atribuir el carácter de esencial a un servicio público significa que las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes, a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales².

Para garantizar el desarrollo armónico del sistema eléctrico en la actividad complementaria de transmisión, el Ministerio de Minas y Energía -MME- es la entidad competente para establecer los Planes de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional³, mediante los cuales identifica y propone la construcción de la infraestructura energética que, de acuerdo con análisis técnicos previos, será indispensable para la atención de la demanda energética en el país. Según el artículo 18 de la Ley 143 de 1994, modificado por la Ley 1151 de 2007, los planes de interconexión buscarán racionalizar los esfuerzos del Estado y de los particulares para satisfacer la demanda nacional de electricidad, según el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Energético Nacional.

Siguiendo los parámetros normativos descritos anteriormente, las convocatorias públicas son un mecanismo para ejecutar los proyectos definidos en el Plan de Expansión, conforme lo señala la Resolución 18 0924 de 15 de agosto de 2003, expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Así mismo, los proyectos de ampliación de las instalaciones del STN pueden ser incluidos en el Plan de Expansión para su respectiva ejecución, como lo indica el artículo 6 de la Resolución CREG 022 de 2001.

¹ La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido que la valoración constitucional de los servicios públicos se basa esencialmente en las obligaciones del Estado que se desprenden de la garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. En armonía con ello, se ha resaltado la connotación eminentemente social de la prestación de tales servicios, cuya correcta ejecución se torna de la mayor relevancia constitucional dado que, "(...) *por una parte, de la realización de los derechos fundamentales de las personas depende en gran medida de la adecuada prestación de los servicios públicos –p.ej. de agua, salud, saneamiento básico, energía, transporte, etc.– y, por otra, el Constituyente ha optado por una forma estatal, el Estado social de derecho, destinada a corregir la deuda social existente en el país con los sectores sociales más desfavorecidos mediante un sistema político que busca la progresiva inclusión de todos en los beneficios del progreso.*" Sentencia C- 565 de 2017.

² Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 1995.

³ Art. 18 Ley 143 de 1994. Esta norma dispone además que compete al Ministerio de Minas y Energía fijar criterios para orientar el planeamiento de la transmisión y la distribución.

Los proyectos UPME 03 2010 y UPME 01 2013 responden a ese marco. El primero de ellos fue incluido dentro del “*Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2010-2024*”, adoptado por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 182215 del 22 de noviembre de 2010. El segundo, contenido dentro del “*Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2013-2027*”, adoptado por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 91159 del 26 de diciembre de 2013.⁴ Los dos proyectos están esencialmente vinculados por la forma en que fueron concebidos. De esta manera, los DSI de la Convocatoria UPME 01 2013 se estructuraron en consideración a la Convocatoria UPME 03 2010, contemplando los siguientes requerimientos técnicos para la ejecución e interconexión de los dos proyectos:

- En la Subestación Norte 230 kV se deben prever los espacios físicos de reserva de futuras bahías, incluyendo la futura instalación de una subestación del STN a 500 kV.
- Los espacios de reserva futuros de los patios de conexiones de los niveles 230 kV y 500 kV, junto con los espacios de acceso, vías internas y edificios, estarían a cargo del inversionista de la convocatoria UPME 03-2010.

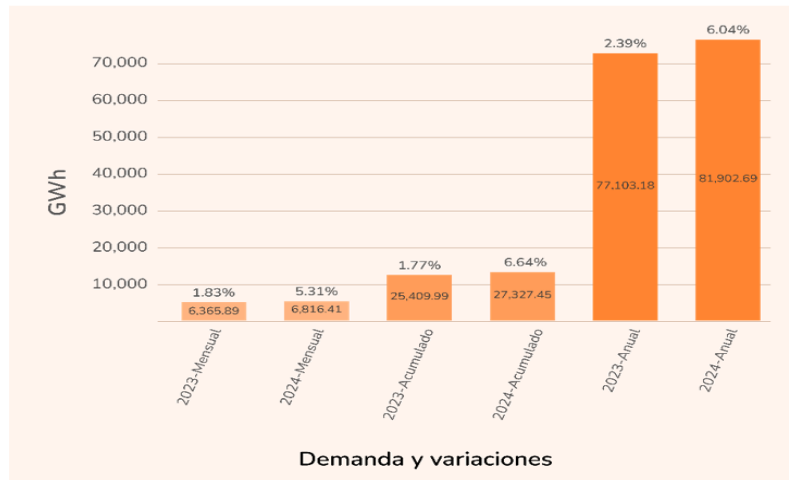
Estos proyectos fueron planeados, hace más de 10 años, con base en las necesidades y datos existentes para la época, en procura de atender la demanda energética y su crecimiento, bajo criterios técnicos de calidad, seguridad y confiabilidad para la región Centro Oriental del país. Sin embargo, para el momento en que fueron incluidos en los planes de expansión, no se contemplaban (i) la emergencia climática⁵ que hoy se afronta y (ii) la urgente necesidad de transición energética hacia fuentes de energía de bajas emisiones, la cual, para su materialización, conlleva mayores requerimientos de energía eléctrica en un escenario que brinde seguridad energética a los usuarios, industria y al propio Estado.

En consonancia, la demanda de energía eléctrica ha crecido aceleradamente en el país. Según reporte de XM -administradores del mercado eléctrico colombiano-, en abril de 2024 la demanda de energía fue de 6,816.41 GWh, **lo que significa un aumento del 5.31% en comparación con el consumo nacional de abril de 2023**, donde la demanda fue de 6,365.89 GWh. Es importante resaltar que, de las diez regiones del país, **la segunda y tercera que tuvo mayor consumo de energía fue la zona Centro con 1,593.96 GWh, y Oriente con 969.57 GWh.**

En el comparativo anual, con corte al 30 de abril de 2024, **hubo un crecimiento del 6.64%** de la demanda de energía del SIN en comparación con el mismo periodo de 2023, según se observa en la siguiente imagen:

⁴ Se recomendó la ejecución proyectos en el Sistema de Transmisión Nacional – STN, entre los cuales se encuentra la construcción de nuevas líneas a nivel de 500 kV, para incrementar las transferencias hacia las áreas Caribe, Suroccidental y Oriental.

⁵ “La expresión “cambio climático” ha dado paso a la de “crisis climática” y esta, a su vez, a la de “emergencia climática”. La referencia a la crisis resalta el estado crítico de la cuestión climática, la complejidad de la situación y la necesidad de actuar.” CASTRO, Natalia; GALVIS, Wilfredo. Emergencia Climática: Prospectiva 2030. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2020. P 19



Fuente: <https://www.xm.com.co/noticias/6874-en-abril-la-demanda-de-energia-en-colombia-aumento-531-en-comparacion-con-el-mismo>

XM también realiza la medición del incremento de la demanda por tipo de consumidor respecto al mismo mes del año anterior. En el consumo residencial y pequeños negocios (mercado regulado) se presentó un crecimiento del 7.78 %, equivalente a 401.37 GWh y por su parte, en el consumo de industria y comercio (mercado no regulado) se presentó un crecimiento del 0.005 %, equivalente a 45.67 GWh, según se observa en la siguiente tabla:

Tipo de mercado	Demanda [GWh] 2023-04	Demanda [GWh] 2024-04	Variación [%]	Participación [%]
Regulado	4,294.81	4,696.16	7.78%	69.25%
No regulado	2,039.24	2,084.91	0.005%	30.75%

Actividad comercial	Demanda [GWh] 2023-04	Demanda [GWh] 2024-04	Variación [%]	Participación [%]
Construcción, alojamiento, información y comunicaciones	122.44	144.5	17.28%	6.93%
Industrias manufactureras	781.14	832.83	2.56%	39.95%
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	111.83	117.57	2.29%	5.64%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	74.17	77.43	0.86%	3.71%
Transporte y almacenamiento	45.94	46.89	0.05%	2.25%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	105.65	107.44	0.0%	5.15%
Explotación de minas y canteras	628.19	613.74	-2.21%	29.44%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	32.63	31.19	-5.16%	1.5%
Servicios sociales, comunales y personales	137.24	113.34	-19.36%	5.44%

Fuente: <https://www.xm.com.co/noticias/6874-en-abril-la-demanda-de-energia-en-colombia-aumento-531-en-comparacion-con-el-mismo>

En el área de influencia de los proyectos UPME 03-2010 (Norte-Chivor) y UPME 01-2013 (Sogamoso), el consumo de demanda pico del Área Oriental es de cerca de 3.000 MW los cuales se incrementan con el paso del tiempo. A su vez, el área cuenta con una capacidad de generar aproximadamente 3.500 MW con el parque de generación disponible **incluyendo 241 MW de Termozipa que genera con carbón liberando altas emisiones de CO2**. En la actualidad la oferta de energía crece a un ritmo de 2.5% anual, mientras la demanda nacional

crece al 8,3%⁶ anual, por lo que la UPME ha advertido que a corto plazo es posible que se dé un déficit de la energía en firme para atender la demanda energética⁷. De acuerdo con lo mencionado por XM, la alerta de déficit está relacionada con el agotamiento de la red de transmisión de energía en el país, debido al incremento de la demanda en el Norte y Occidente de la Sabana de Bogotá y el retraso de proyectos estratégicos como la Subestación Norte 500kV. Ante la imposibilidad de contar con las redes de transmisión se prevé que para el 2025-2026, esta área del país no pueda contar con la infraestructura de red necesaria para atender de forma confiable y segura la demanda esperada⁸.

En síntesis, el lento avance de los proyectos de interés estratégico -tales como Sogamoso y Norte-Chivor- y su consecuente atraso en la fecha de puesta en operación, conduce al país a un gran reto, el cual consiste en equilibrar la oferta y la demanda energética⁹. Para enfrentar este desafío es necesaria la cooperación por parte de las entidades gubernamentales que tienen incidencia e intervienen en la viabilidad y ejecución de estos proyectos. En este punto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible juega un rol fundamental: el cual corresponde al trámite de levantamiento de un área protegida bajo la figura legal de un área de reserva forestal habilitando estas áreas para la ejecución de proyectos de utilidad pública e interés social. Cabe destacar que el desarrollador del proyecto, esto es el Grupo Energía Bogotá, ha cumplido con todos los requisitos legales para obtener una decisión favorable y de fondo de los trámites de sustracción. Así mismo, es importante tener en cuenta que sin este permiso no es posible continuar el trámite de evaluación ambiental y obtener la licencia para la construcción y puesta en servicio de los proyectos.

1.2. Relevancia de los Proyectos.

El propósito y objetivos de la convocatoria efectuada por el Gobierno Nacional - Ministerio de Minas y Energía, a través de la UPME, fue seleccionar al agente para ejecutar el proyecto identificado en el plan de expansión para lograr un adecuado abastecimiento de la demanda de energía eléctrica. Entre las actividades encomendadas a GEB, se encuentran las siguientes: (i) definición de especificaciones técnicas de las líneas de transmisión; (ii) la preconstrucción de las obras que requiera el proyecto; (iii) construcción de las obras necesarias para garantizar el proyecto y (iv) administración, operación y mantenimiento del proyecto durante veinticinco (25) años¹⁰. Por eso, la finalidad de la puesta en operación de la infraestructura que hace parte de los proyectos mencionados es la de mejorar la prestación del servicio público de energía eléctrica para el centro y oriente del país, en una región que concentra el 25% de la población colombiana y representa el 32% de la demanda nacional de energía.

El proyecto UPME 03 2010 recorre alrededor de 162 kilómetros; pasa por 12 municipios de

⁶ Acosta Medina, Amilkar David. La amenaza del racionamiento de energía. En: Blog del Sector Minero Energético. Universidad Externado de Colombia, 15 de abril de 2024. En línea. Disponible en: <https://boletinmineroenergetico.uexternado.edu.co/la-amenaza-del-racionamiento-de-energia/>

⁷ <https://www.portafolio.co/energia/deficit-de-energia-para-2028-que-va-la-upme-y-las-acciones-para-taparlo-605097>

⁸ XM. Señales de XM sobre el agotamiento de la red transmisión de energía en algunas zonas del país e incrementos de la demanda que, puntualmente, han superado las proyecciones de la UPME, 17 de julio de 2023. En línea. Disponible en: <https://www.xm.com.co/noticias/6026-senales-de-xm-sobre-el-agotamiento-de-la-red-transmision-de-energia-en-algunas-zonas>

⁹ <https://es.linkedin.com/pulse/descubre-los-retos-que-debes-conocer-sobre-la-oferta-y-demanda-ubkne>

¹⁰ Documento de Selección del Inversionista de las Convocatorias UPME 03 2010 y UPME 01 2013.

Cundinamarca y 7 municipios de Boyacá. Este proyecto contempla la instalación de 364 sitios de torre en total, distribuidos en cuatro tramos constructivos. En el caso del proyecto UPME 01 2013 la línea recorre alrededor de 383 kilómetros; pasa por 11 municipios de Santander, 4 de Boyacá y 23 de Cundinamarca; requiere la instalación de 855 torres en total, distribuidas en siete tramos.

El Proyecto UPME 01-2013 se encamina a garantizar la continuidad y universalidad de la prestación del servicio público domiciliario de electricidad, conforme a las proyecciones de aumento de la demanda y constituye una medida de mitigación de los riesgos de interrupción, es decir mejora la confiabilidad del sistema. Las obras de infraestructura eléctrica del Proyecto UPME 03 de 2010 permitirán atender la demanda energética y su crecimiento bajo criterios técnicos de calidad, seguridad y confiabilidad para la región Centro Oriental del país. En suma, se trata de un proyecto de beneficio para la población en general, enmarcado en una necesidad de servicio confiable y seguro que se traduce en una mejor calidad de vida y en energía eléctrica para la transición energética y la descarbonización.

En síntesis, los beneficios que se logran con la construcción y puesta en operación de los Proyectos UPME 01 2013 y UPME 03 2010, son los siguientes:

- a) Incrementa la transferencia de energía al área oriental del país, con los niveles requeridos de calidad, seguridad y confiabilidad para la atención de la demanda de la región. Esto permite interconectar los proyectos UPME 01 de 2013 y UPME 03 2010 con otras regiones del país para transportar más energía limpia hacia la región centro, contribuyendo a cubrir la demanda de electricidad.
- b) Permite la reducción de los costos operativos del servicio de energía eléctrica. Con ello se evita programar la generación de plantas térmicas (gas, *diesel* o carbón) más costosas para el usuario final y que, adicionalmente, generan un mayor impacto ambiental por sus emisiones.
- c) Contribuye al desarrollo económico y social de una región que está en gran crecimiento por su desarrollo empresarial. Fortalecer la transmisión de energía permite en lo económico atender la demanda de energía derivada de la creación de nuevas empresas, la construcción de nuevas zonas industriales, nuevos emprendimientos comerciales, aumento de tiempos productivos por mayores horas de iluminación, mejoras en la productividad por la incorporación de tecnologías para la producción. En lo social, permite mejorar las condiciones para la prestación del servicio público de educación, por ejemplo, con la conectividad al servicio de internet; mejorar la calidad del servicio de la salud y aumentar el disfrute de horas del espacio público.
- d) Incrementa la confiabilidad del suministro de energía en el país a futuro. La ejecución de estos proyectos garantiza el suministro de energía ante situaciones de estrés del Sistema Interconectado Nacional - SIN, con fundamento en las proyecciones de demanda de energía eléctrica realizadas por la UPME y las realidades del sistema.
- e) Eleva la seguridad energética y la estabilidad del sistema eléctrico colombiano. Esto permite garantizar el suministro confiable y eficiente de energía eléctrica

en condiciones de calidad y continuidad¹¹, lo cual hace parte esencial del cumplimiento de la función social del Estado de satisfacer las necesidades básicas de la población.

En consecuencia, los proyectos se encuentran estrechamente relacionados con el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, consagrado expresamente en el literal j, artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

Más allá de los aspectos técnicos asociados con los proyectos y el interés y responsabilidad del Grupo Energía Bogotá en la ejecución de los mismos, es importante destacar la necesidad de que estos entren en operación, no sólo porque con ello se da cumplimiento a los planes de expansión del sistema y la atención de las necesidades de la demanda, sino a la concreción efectiva de los derechos de los ciudadanos y los diferentes sectores que lo componen (salud, educación, vivienda, industria, comercio, entre otros), y de los cuales se deriva y materializa el efectivo goce y la garantía del desarrollo de sus actividades económicas, el fortalecimiento de su calidad de vida y la disponibilidad y certeza del cubrimiento de sus necesidades en salud, educación, transporte, etc.

1.3. Aspectos ambientales

Las líneas de transmisión que hacen parte de los proyectos han sido diseñadas bajo estrictos criterios técnicos y medioambientales que buscan proteger el medio ambiente y su construcción avanza bajo criterios claros de respeto a la naturaleza y sus recursos, garantizando la no afectación de las fuentes hídricas del territorio, sumado a las acciones de prevención y control frente a eventuales impactos ambientales. GEB ha dado cumplimiento a lo dispuesto en las normas ambientales asociadas al licenciamiento ambiental. Así, en procura de acompañar el deber superior de protección y preservación del medio ambiente con la necesidad de desarrollo de actividades económicas y sociales, el ordenamiento jurídico ha previsto la necesidad de contar con instrumentos legales cuyo cumplimiento permita la ejecución de los proyectos, obras y/o actividades que generan impactos al medio ambiente. De esta manera, el Estado puede cumplir con su obligación de proteger el medio ambiente, pero también otras obligaciones que le son inherentes, como la prestación de los servicios públicos, además de permitir el desarrollo de las actividades económicas que impulsan el crecimiento del país, otorgando las licencias y autorizaciones del caso para la ejecución de las obras necesarias, sobre la base de que se da plena observancia y cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la ley ambiental.

El Decreto 1076 de 2015 “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*”, en su artículo 2.2.2.3.1.3. define la licencia ambiental y sujeta a su beneficiario al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. De esta manera, es posible acompañar el deber superior de protección y preservación del medio

¹¹ Artículo 136 de la Ley 142 de 1994.

ambiente con la necesidad de desarrollo de actividades económicas y sociales y particularmente la prestación de servicios públicos como la energía eléctrica¹².

Para el caso de los Proyectos UPME 03-2010 y UPME 01-2013, como es de su absoluto conocimiento, GEB tramitó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA la Licencia Ambiental, surtiendo para ello las etapas de evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA¹³ y del Estudio de Impacto Ambiental¹⁴. Así mismo, tramitó los permisos ante otras autoridades como se explica a continuación:

Proyecto UPME 03-2010: ANLA dio inicio al trámite administrativo de evaluación del estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por GEB mediante Auto 4182 del 04 de diciembre de 2013. En el estudio en mención, se presentaron alternativas ante ANLA para la construcción del proyecto. Como resultado de la evaluación, ANLA profirió el Auto No. 5250 de 14 de noviembre de 2014, por medio del cual evaluó el Diagnóstico Ambiental de Alternativas del Proyecto UPME 03-2010 y eligió la “*Alternativa 1*” para la construcción del EIA. Contra dicho acto administrativo se presentaron recursos de reposición, que se resolvieron por ANLA mediante el Auto 2568 de julio 01 de 2015 que confirmó el Auto 5250 de 2014.

Con base en lo anterior, GEB procedió a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, tomando como fundamento los términos de referencia LI TER 1-01 de 2006 y el Decreto 1076 de 2015 y las normas vigentes. Se precisa que el estudio de impacto ambiental presentado ante la autoridad identificó los impactos que se pudieran ocasionar con las obras del proyecto y estableció las medidas de manejo necesarias para mitigarlos efectivamente.

Adicionalmente, la Empresa también tramitó y obtuvo en debida forma, las siguientes autorizaciones ambientales que harían parte integral de los permisos otorgados en la licencia ambiental, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 y el parágrafo 5 del artículo 2.2.2.3.6.3 “*De la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental*”¹⁵:

¹² En concordancia con lo anterior se resalta la directriz jurisprudencial decantada por la Corte Constitucional que ha conciliado los alcances del principio de protección al medio ambiente con la necesidad de desarrollo de actividades productivas y de sustento de la existencia humana a partir del principio de desarrollo sostenible. Así se extracta de la sentencia C-123 de 2014 con ponencia de Alberto Rojas Ríos, en la cual esa Corporación acotó: “La protección y promoción del ambiente no es un bien absoluto en nuestro ordenamiento constitucional, por lo que los mandatos derivados a partir de las disposiciones constitucionales deben ser interpretados en conjunto con otros principios y derechos protegidos por el ordenamiento constitucional, incluso cuando en un caso concreto parezcan contradictorios o incoherentes con la protección del ambiente. Un concepto que desarrolla este principio, y que se relaciona con el tema ahora analizado, es el de desarrollo sostenible, con el que se significa que las actividades que puedan tener consecuencias en el ambiente –verbigracia, actividades económicas- deben realizarse teniendo en cuenta los principios conservación, sustitución y restauración del ambiente.”¹²”

¹³ 2.2.2.3.4.1 del decreto 1076 de 2015: “Artículo 17. Objeto del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA, tiene como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico, las características bióticas, abióticas y socioeconómicas, el análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; así como las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas.

Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse.

¹⁴ “ARTÍCULO 2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (...) y los términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente:

¹⁵ Decreto 1076 de 2015: **ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto ambiental.** 5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de treinta (30) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declare reunida toda la información requerida así como para expedir la resolución que otorga o niega la licencia ambiental. Tal decisión deberá ser notificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y publicada en el boletín de la autoridad ambiental en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

- Resolución 1991 de 2016, levantamiento parcial de la veda nacional de especímenes de la flora silvestre otorgado por el MADS
- Resolución 406 de 2017, levantamiento parcial de la veda regional de especímenes de la flora silvestre otorgado por Corpochivor
- Resolución 620 de 2018, Sustracción de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la

Finalizado el trámite dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 para la evaluación del EIA, incluyendo, la ejecución de Audiencias Públicas y participación de terceros intervinientes, la Autoridad otorgó Licencia Ambiental al proyecto.

Proyecto UPME 01-2013: ANLA dio inicio al trámite administrativo de evaluación del estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas mediante Auto 906 del 09 de marzo de 2015, el cual concluyó mediante Auto No. 1437 de 20 de abril de 2015, con el cual se seleccionó la alternativa No. 1 para la elaboración del EIA.

Con fundamento en la alternativa seleccionada, GEB elaboró el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, tomando como fundamento los términos de referencia LI TER 1-01 de 2006, el Decreto 1076 de 2015 y las demás normas vigentes. Cabe precisar que el estudio de impacto ambiental presentado identificó los impactos que se pudieran ocasionar con las obras del proyecto y estableció las medidas de manejo necesarias para mitigarlos.

Adicionalmente, GEB también tramitó y obtuvo en debida forma, las siguientes autorizaciones ambientales que harían parte integral de los permisos otorgados en la licencia ambiental, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 y el parágrafo 5 del artículo 2.2.2.3.6.3 “De la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental”¹⁶:

- Resolución DGL 1069 del 23 de septiembre de 2016 por medio de la cual la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, autoriza un levantamiento parcial de veda.
- Resolución 1956 del 23 de noviembre de 2016, expedida por la Dirección de Bosques, biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la cual se levanta de manera parcial la veda para especies de la flora silvestre.
- Resolución 2502 del 1 de diciembre de 2017, Sustracción Ley 2ª Magdalena,
- Resolución MADS 0991 del 05 de junio de 2018 y Resolución MADS 0968 del 31 de mayo de 2018, autorización Sustracción.

PARÁGRAFO 5. Cuando el proyecto, obra o actividad requiera la sustracción de un área de reserva forestal o el levantamiento de una veda, la autoridad ambiental no podrá dar aplicación al numeral 5 del presente artículo, hasta tanto el solicitante allegue copia de los actos administrativos, a través de los cuales se concede la sustracción o el levantamiento de la veda.

¹⁶ Decreto 1076 de 2015: **ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3.** *De la evaluación del estudio de impacto ambiental.* 5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de treinta (30) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declare reunida toda la información requerida así como para expedir la resolución que otorga o niega la licencia ambiental. Tal decisión deberá ser notificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y publicada en el boletín de la autoridad ambiental en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

PARÁGRAFO 5. Cuando el proyecto, obra o actividad requiera la sustracción de un área de reserva forestal o el levantamiento de una veda, la autoridad ambiental no podrá dar aplicación al numeral 5 del presente artículo, hasta tanto el solicitante allegue copia de los actos administrativos, a través de los cuales se concede la sustracción o el levantamiento de la veda.

- Acuerdo CAS No. 0356 del 27 de julio de 2018 del DRMI Serranía de los Yariguíes,
- Acuerdo CAR No. 45 del 18 de diciembre de 2018 del DMI Páramo de Guargua y Laguna Verde.
- Acuerdo CAR No. 44 del 18 de diciembre de 2018 del DMI Salto del Tequendama – Cerro de Manjui.
- Acuerdo CAR No. 15 del 21 de mayo de 2019 por medio del cual resolvió recurso de reposición al Acuerdo No. 44.

Finalizado el trámite dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 para la evaluación del EIA, incluyendo, la ejecución de Audiencias Públicas y participación de terceros intervinientes, la Autoridad otorgó Licencia Ambiental al proyecto.

Particularmente para el caso de los trámites de modificación de la sustracción de reserva que se gestionan ante el MADS, objeto de esta reiteración, en el marco de lo requerido en las modificaciones de licencia, GEB ha acatado lo dispuesto en la Resolución No. 110 de 2022 del MADS. Así mismo para el trámite no asociado a las modificaciones de licencia, GEB ha dado cumplimiento a lo previsto en la Resolución 1526 de 2012 del MADS. En esa medida GEB allegó, ante su despacho, todos los requisitos exigidos, entre ellos el Formato Único de Sustracciones con las formalidades, el estudio técnico y el modelo de almacenamiento geográfico que se elaboraron con fundamento en los términos de referencia y la normativa vigente. Así mismo, GEB ha dado cumplimiento a todas las solicitudes de información complementaria formuladas por la autoridad con el fin de suministrar todos los elementos, análisis, entre otros, requeridos para la toma de decisión.

En ese orden de ideas, GEB ha dado cumplimiento estricto a los requerimientos ambientales y así mismo ha satisfecho los requerimientos formulados por ese Ministerio y por las normas aplicables para el trámite de sustracción. Cabe destacar que, en este último caso, ello se asocia a una actividad de utilidad pública e interés social. En consecuencia, teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento a los requerimientos, requisitos y exigencias tanto de las autoridades como de los establecidos por las normas vigentes, el GEB tiene derecho a que se le otorguen las autorizaciones solicitadas. En el mismo sentido, y dado que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley, no hay razones que justifiquen demoras ni dilaciones para que la autoridad expida las autorizaciones correspondientes.

II. CONSECUENCIAS ADVERSAS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO Y PARA EL GEB POR LA OMISIÓN DE RESPUESTA DE FONDO POR PARTE DE LA AUTORIDAD.

2.1. Contexto

Es fundamental que el MADS tenga presente que un conjunto de circunstancias ajenas a GEB han desplazado en el tiempo la fecha de puesta en operación de los proyectos, especialmente las asociadas con las órdenes derivadas de acciones judiciales. Estas órdenes judiciales han significado que hoy en día los proyectos UPME 03 2010 y UPME 01 2013 difieran de lo que

inicialmente concibió la UPME y el ejecutor del proyecto. Por eso, el GEB ha tenido que adelantar acciones, trámites adicionales y asumir reprocesos para garantizar el desarrollo de las obras necesarias para la ejecución de los proyectos. A estas eventualidades se suman las restricciones propias de la licencia ambiental que generaron la necesidad de modificar el instrumento y de adelantar nuevos trámites de sustracción asociados¹⁷.

La emisión de los actos administrativos que resuelvan la solicitud de sustracción (expedientes SRF-679 y SRF-649) resultan fundamentales para los proyectos, por cuanto son un requisito *sine qua non* para la expedición de la modificación de la licencia ambiental, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 5° del artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015¹⁸. En relación con el trámite que obra en el expediente SRF 395, la emisión del acto que resuelva la sustracción es necesaria para modificar la Resolución 620 de 2018 y, por lo tanto, para habilitar la construcción en tres sitios de torre adicionales. Como es de conocimiento de la autoridad ambiental, sin el pronunciamiento del Ministerio sobre las solicitudes de sustracción **no resulta posible para el GEB adelantar la construcción en 193 sitios de torre en total.**

Tal y como se señaló en el acápite anterior, GEB adelantó los trámites de sustracción en cumplimiento de los requisitos legales establecidos en las Resoluciones 1526 de 2012 y 110 de 2022, todo ello con el propósito de obtener la decisión de fondo dentro de los tiempos previstos para cada trámite ambiental.

A continuación, se sintetizan las principales situaciones que han impactado negativamente la ejecución de los proyectos. Esta información es relevante para que su Despacho tenga un panorama general del estado actual de los proyectos y de la urgencia para resolver prontamente los trámites de esta solicitud:

2.1.1. Decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que impactaron la ejecución de los proyectos UPME 03-2010 y UPME 01-2013

El 28 de marzo de 2014, el Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia dentro de la Acción Popular de radicado No. 2001-0479-02, debido a la contaminación del Río Bogotá. El seguimiento al cumplimiento del fallo le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC), en cuyo desarrollo decretó medida cautelar ordenando a la CAR y ANLA no expedir la licencia ambiental y suspender el procedimiento administrativo de licenciamiento ambiental hasta que el tribunal se pronunciara respecto de los proyectos UPME 03-2010 (Chivor Norte 230 kV) y UPME 01-2013 (Sogamoso – Nueva Esperanza 500 kV). Con posterioridad a ello, el TAC emitió órdenes a la ANLA y a la CAR frente a los Proyectos UPME 03-2010 y UPME 01-2013 que han implicado, estudios y trámites ambientales adicionales, así como múltiples reprocesos en la gestión preoperativa de los proyectos.

¹⁷ Sobre el particular, el Ministerio de Minas y Energía ha reconocido que la ejecución de los Proyectos se ha visto gravemente afectada por decisiones judiciales y administrativas que alteraron completamente la planeación y el desarrollo de las obras para poner en operación los proyectos en el tiempo establecido. Tales decisiones provocaron la necesidad de adelantar actuaciones no previsibles en el procedimiento administrativo.

¹⁸ Decreto 1076 de 2015 **PARÁGRAFO 5 - 2.2.2.3.8.1** Cuando la modificación del proyecto, obra o actividad requiera la sustracción de un área de reserva forestal o el levantamiento de una veda, la autoridad ambiental no podrá dar aplicación al numeral 5 del presente artículo, hasta tanto el solicitante allegue copia de los actos administrativos, a través de los cuales se concede la sustracción o el levantamiento de la veda.

Los proyectos han atravesado una situación de fuerza mayor, proveniente de las decisiones judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogidas por ANLA. Estas decisiones, en el componente de gestión ambiental, condujeron al ejecutor del proyecto a adelantar nuevos estudios ambientales (DAA y EIA) para la subestación Norte 230 kV y parte de sus líneas asociadas, modificaciones de licencia ambiental, trámites administrativos entre otros. Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía ha manifestado que existe un atraso en el trámite de licenciamiento ambiental, producto de una fuerza mayor, que tiene connotación externa por ser una decisión de la autoridad ambiental la que cambia el panorama y la planeación del promotor, misma que por su fuerza vinculante y de presunción de legalidad se torna imprevisible e irresistible para el ejecutor del proyecto. Esta gravísima situación, no debería ser agudizada por las autoridades administrativas a cargo de trámites requeridos para la ejecución de los proyectos, por demoras en la resolución de estos.

2.1.2. Oposición comunitaria y sectores a la ejecución de los proyectos

Los Proyectos han tenido una férrea y sistemática oposición por parte de algunas personas, sectores y autoridades que se han manifestado particularmente en las siguientes actuaciones:

(i) **Impedimento para el ingreso a predios:** Algunos propietarios han manifestado su inconformidad con el proyecto impidiendo el ingreso a sus predios, entre otras, por las siguientes causas:

1. Desconocimiento de los proyectos de Transmisión.
2. Inconformidad con que se instale infraestructura en los predios de su propiedad.
3. Desconocimiento de las órdenes judiciales que autorizan el ingreso para la ejecución de los trabajos.
4. No estar de acuerdo con los valores ofertados calculados de acuerdo con las metodologías de valoración establecidas.
5. Desconocimiento del área de ingreso a la Servidumbre (Áreas de acceso a los predios).
6. Dificultades de notificaciones a los demandados.
7. Manifestación de posibles afectaciones a la salud por la ejecución de proyectos de energía eléctrica, asociada a campos electromagnéticos.
8. Desconocimiento del procedimiento de servidumbre. Los Propietarios suelen confundir la imposición de una servidumbre de conducción de energía eléctrica y su alcance con una compraventa o expropiación.

ii) Acciones judiciales

Se han presentado y resuelto favorablemente a GEB las siguientes acciones judiciales dirigidas a impedir la ejecución del proyecto:

Cantidad	Tipo de proceso	Radicado	Pretensión	Estado
1	Acción Popular	1100133430592	Resciliar el contrato de	Terminado

		0170006100	compraventa lote SE Norte – Gachancipá	– Favorable a GEB
2	Acción Popular	2500023410002 0180046400	Ordenar a ANLA y la CAR archivar las solicitudes de licencias ambiental para los proyectos Norte y Sogamoso	Terminado – Agotamiento de la jurisdicción
3	Acción de Tutela ¹⁹	Expediente T-8.397.515	Suspensión de la ejecución del proyecto y el impedimento de utilizar los predios de la fundación por presunta vulneración a los derechos fundamentales a la salud de los niños y adolescentes.	Negó el amparo.

2.1. Consecuencias desfavorables de la mora administrativa a los potenciales suscriptores o usuarios, al proyecto y a su ejecutor.

Los Proyectos Sogamoso y Norte los concibió el Gobierno Nacional – Ministerio de Minas y Energía – UPME dentro del marco de planeación de las necesidades de energía de la región centro – oriente. Como se ha indicado, los mismos tienen la finalidad de atender la creciente demanda de energía eléctrica en la zona centro oriental del país y garantizar la confiabilidad del sistema con criterios de calidad y continuidad en el servicio. Así mismo, no existen otros proyectos ni otras soluciones con los cuales se puedan atender las necesidades de esa zona.

Teniendo en cuenta ese contexto y ante los requerimientos actuales del sistema eléctrico de la zona centro oriental, la omisión de respuesta oportuna y de fondo frente a las sustracciones solicitadas por GEB afecta: (i) a los potenciales suscriptores o usuarios, particularmente a complejos residenciales, la industria, *datacenters* y comercio, quienes tendrán una asignación

¹⁹ El 16 de junio de 2021, fue notificada al GEB la Acción de Tutela instaurada por una fundación ubicada en el municipio de Tabio, en los predios denominados Santa Sofía y El Consuelo, en la vereda El Salitre, del municipio de Tabio (y refieren que allí se realizará la ubicación de la Torre 75N). Esta tutela planteó la presunta vulneración a los derechos fundamentales a la salud, integridad, interés superior de los niños y adolescentes que hacen parte de Fundación que con ocasión de la licencia ambiental y el paso de las líneas de alta tensión se verían afectados, por lo que en la Acción de Tutela se solicitó la suspensión de la ejecución del proyecto, la prohibición de usar los predios de la fundación hasta que no se realizaran estudios técnicos sobre los efectos del proyecto, la adopción de medidas de restablecimiento de derechos para prevenir y proteger los riesgos a los niños, entre otras.

La sentencia de Primera Instancia fue proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 30 junio 2021, declarando la improcedencia de la acción. Esta sentencia fue impugnada por la accionante Fundación, la sociedad propietaria de los predios donde está la fundación, y coadyuvó la Comisaría de Familia de Tabio. La Sentencia de Segunda Instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral el 13 de agosto 2021 negó de fondo las pretensiones, revocando la primera instancia para no dejarla como improcedente.

Posteriormente la tutela fue seleccionada para revisión de la Corte Constitucional el 15 de diciembre de 2021, como resultado de la insistencia presentada por parte del magistrado Jorge E. Ibáñez, acudiendo a la causal de necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, por criterio objetivo. Alcance del principio de precaución y derechos de los niños. Mediante sentencia T-194 del 2 de junio de 2022, la Corte resolvió confirmar el fallo de segunda instancia del 13 de agosto de 2021, exponiendo dentro de sus consideraciones, entre otras, las siguientes: Las entidades especializadas en el área de la salud que fueron invitadas a conceptuar, algunas enfocadas en los estudios sobre el cáncer, enfatizaron que según el estado actual de la prolífica producción científica sobre la materia (cerca de 25.000 artículos), no hay riesgo alguno para la salud derivado de la exposición a campos electromagnéticos relacionados con la transmisión de energía eléctrica, en las condiciones previstas en el RETIE. Refirieron que en la actualidad la International Agency for Research on Cancer (IARC), que hace parte de la OMS, catalogó este tipo de radiación como “no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los humanos”. La producción científica actual indica que la exposición a campos electromagnéticos asociados a la conducción de energía en líneas de alta tensión, en los límites del RETIE, no amenaza la salud humana. Es claro respecto de todos los seres humanos, niños y adultos, e incluso en mujeres en embarazo y en fetos. Incluso los niveles de exposición no superan los de algunos electrodomésticos de uso frecuente en el hogar.

En el asunto concreto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional concluyó que, con soporte en lo manifestado de forma unánime por los especialistas en materia de salud invitados a conceptuar, no hay riesgo de que los niños, niñas y adolescentes puedan presentar cáncer asociado a la instalación de la Torre N75 y el cableado correspondiente.

de capacidad por parte del Operador de Red condicionada a la entrada en operación de los proyectos a cargo de GEB. (ii) a la confiabilidad del servicio de energía eléctrica en la zona centro oriental por cuanto existen riesgos operativos ante el estrés del sistema de transmisión existente. Los retrasos en los trámites de sustracción antes referidos impactan negativamente **193 sitios de torre²⁰** y podrían generar las siguientes consecuencias para el proyecto y para el ejecutor generando afectaciones de índole económica, implicando mayores valores a cargo de una empresa, la cual, se debe resaltar, tiene en su capital una participación accionaria mayoritariamente estatal:

- a) En los trámites SRF-00649 y SRF 679, retrasa el otorgamiento de la modificación de licencia ambiental. Según lo enunciado en acápites anteriores, la emisión de los actos administrativos que resuelvan la solicitud de sustracción resulta fundamental para los proyectos, por cuanto son un requisito *sine qua non* para la expedición de la modificación de la licencia ambiental, según lo establecido en el parágrafo 5° del artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015.
- b) Desplaza los cronogramas para las actividades de obra y tendido en todos los sitios de torre por mayores tiempos en la etapa de construcción debido a la discontinuidad de los tramos habilitados para obra. Asimismo, se podría generar mayor permanencia de los contratistas de construcción (actividades preliminares, obra, montaje y tendido) e interventoría en territorio, movilización y desmovilización de las cuadrillas de trabajo, debido a la falta de liberación de los sitios de obra asociados al trámite de la modificación ambiental. Al ser la sustracción un requisito indispensable para la evaluación ambiental, las demoras en el MADS desplazan el otorgamiento de la modificación del instrumento ambiental impidiendo cumplir con el cronograma de construcción.
- c) Mayores costos de Gerenciamiento del Proyecto. El desplazamiento en el tiempo podría generar que GEB deba mantener por más tiempo del estimado la dirección y gerenciamiento de los proyectos a su cargo.
- d) Riesgo de *stand by* de obra. Dada la falta de resolución por parte del MADS y la ya anotada afectación a 193 sitios de torre, los contratos que tiene celebrados el GEB para el cumplimiento de sus obligaciones ante el sistema podrían tener lapsos de inactividad de los contratistas con eventuales reclamaciones y mayores valores.
- e) Reprocesos en la gestión predial y mayores valores de negociación de servidumbre por nuevos requerimientos de los propietarios.
- f) Debido a no contar con la totalidad del proyecto licenciado el ejecutor debe ingresar en

²⁰ Esta afectación se deriva de: i) El Trámite de sustracción requerido para la modificación ambiental por restricciones del proyecto UPME 01 2013 (expediente SRF-00649) (5 sitios de torre): ANLA, mediante Auto No. 1106 del 06 de marzo de 2024, suspendió los términos de la evaluación de la modificación de licencia ambiental de Restricciones (MLA2) hasta obtener la copia del acto administrativo mediante el cual se concede la sustracción. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 5° del artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015. Los retrasos en el pronunciamiento de la sustracción desplazan la viabilidad ambiental de 163 sitios de torre, que hacen parte de la modificación de la licencia e impactan directamente el inicio de actividades preliminares, obra y montaje para estas torres que se encuentran distribuidas a lo largo de la línea de transmisión y los tramos de tendido asociados a estas. ii) Modificación de la Resolución 620 de 2018 para el movimiento de 3 polígonos autorizados de las torres 77nv, 79nn y 100nv - Sustracción de Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta Rio Bogotá. Proyecto UPME 03 2010 (expediente SRF 395). Las demoras en el pronunciamiento del trámite de modificación de la Resolución 620 de 2018, desplaza el inicio de actividades preliminares, obra y montaje en los polígonos de (tres) 3 sitios de torre 77nv, 79nn y 100nv y los vanos asociados. iii) - Trámite de Sustracción de Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta Rio Bogotá, requerida para la modificación 2 de la licencia ambiental (2 sitios de torre) (expediente SRF 679). Las demoras en el pronunciamiento de sustracción para 2 sitios de torre impactan directamente la aprobación de la modificación de la licencia ambiental del tramo 4 (MLA2) en la cual se tramita ante ANLA la viabilidad para 30 sitios de torre y los tramos de tendido asociados estas. A su vez, la no obtención oportuna de la modificación de la licencia ambiental desplaza el inicio de actividades preliminares, obra y montaje para estas torres y los tramos de tendido asociados a estas.

diferentes momentos a los sitios de sitios obra. Esto genera nuevos requerimientos de la comunidad para permitir el ingreso a los de obra.

- g) Desplaza la fecha de puesta en operación de los proyectos. Como se explicó estos proyectos de interés nacional fueron objeto de convocatorias realizadas por la UPME. La UPME, en los términos de selección del inversionista, estableció una fecha de puesta en operación oficial, en procura de lograr los cometidos trazados en los planes de expansión. Esta fecha se ve gravemente impactada por la mora administrativa de la autoridad ambiental, la cual, retrasa el otorgamiento de la modificación de la licencia ambiental, el inicio de la fase constructiva y, consecuentemente, la fecha de puesta en servicio del proyecto.

De otra parte, los perjuicios se identifican en los costos que deberán afrontar los ciudadanos y en general los usuarios de los servicios públicos, especialmente el de energía, por la falta de confiabilidad del sistema y la imposibilidad de atender la demanda actual y para la expansión o el desarrollo de nuevos proyectos comerciales, industriales, de vivienda, entre otros. La mora administrativa y la dilación en los trámites de sustracción, la cual se suma a las complejidades de los proyectos, no solo tiene efectos inmediatos y directos, sino que impacta múltiples frentes de los proyectos, a su ejecutor, a los suscriptores y usuarios del servicio, amenazando la seguridad energética de la zona centro oriental del país. A la fecha, estas demoras y dilaciones subsisten a pesar del cumplimiento de los requisitos legales por parte de GEB para que se emita una respuesta favorable y de fondo, lo cual no ha acaecido, tal y como se explicará en el siguiente acápite.

En conclusión, además de las gravísimas afectaciones al sistema y a los usuarios ocasionadas por los retrasos en la obtención de los permisos ambientales, los perjuicios que se derivan de esta situación en la que se ha visto el GEB, se podrían reflejar en diversos y altísimos costos adicionales para la ejecución de los proyectos.

3. **EL DERECHO DE PETICIÓN NO HA SIDO RESUELTO CONFORME A LAS EXIGENCIAS IDENTIFICADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.**

3.1. **Alcance del derecho fundamental de petición**

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la garantía contenida en el Artículo 23 de la Constitución Política tiene dos componentes esenciales: (i) la posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades, y como correlativo a ello, (ii) la garantía de que se otorgue respuesta **clara, de fondo, suficiente, eficaz o efectiva, oportuna y congruente con lo solicitado**. Con fundamento en ello, el núcleo esencial del derecho de petición se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la existencia de una real respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional²¹. Esto se traduce en que, en el marco del ejercicio de ese derecho fundamental,

²¹ “El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii)

la autoridad encargada de responder la solicitud debe cumplir con dichos requisitos²².

La Corte Constitucional ha decantado estas características y ha ilustrado su correcta comprensión. Así, para que una respuesta pueda calificarse como **de fondo**, la Corte, en Sentencias como la T-667 de 2011, ha exigido que la Autoridad “...se pronuncie de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado”. De la misma forma, para que la respuesta sea **suficiente** la Autoridad debe resolver materialmente la petición y satisfacer los requerimientos del solicitante²³. Esta exigencia se encuentra íntimamente ligada con la de eficacia o efectividad de la respuesta que conlleva dar solución al caso que se plantea, tal y como puede verse en la Sentencia T-682 de 2017.

En la providencia antes citada, en la que esencialmente se discutía la congruencia de una respuesta brindada por la administración, la Corte indicó que este elemento del derecho de petición impone “que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta”.

Finalmente, la respuesta debe ser oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes. En la Sentencia C-818 de 2011, la Corte, al referirse a la prontitud en la resolución de la petición, indicó que esta “es de la esencia del derecho, toda vez que si esta se produce en forma tardía haría nugatoria la pronta resolución que exige la disposición constitucional”.

3.2. Vulneración del derecho de petición en el caso concreto

A la fecha GEB ha gestionado solicitudes de sustracción de reserva que no han sido resueltas

respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión.

(i) **Formulación de la petición:** el derecho de petición “protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a las autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley, solicitudes respetuosas, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas”. Por tanto, los obligados a cumplir con este derecho tienen el deber de recibir toda clase de petición, puesto que esa posibilidad hace parte del núcleo esencial del derecho.

(ii) **Pronta resolución:** las autoridades y particulares tienen la obligación de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que este exceda el tiempo legal, interregno que el Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011 fijaron en días 15 hábiles. La Corte ha comprendido que el plazo de respuesta del derecho de petición debe entenderse como un tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver la solicitud, de modo que ellos pueden responder la petición antes del vencimiento de dicho interregno.

(iii) **Respuesta de fondo:** dentro del núcleo esencial del derecho de petición se encuentra la obligación que tienen las autoridades y los particulares de responder de fondo las peticiones de forma clara además de precisa. Tal deber es apenas obvio, pues de nada serviría reconocer a la persona el derecho a presentar peticiones si estas no deben resolverse materialmente. (...) La jurisprudencia de la Corte ha precisado que la respuesta de los derechos de petición debe observar las siguientes condiciones para que sean considerada válida en términos constitucionales: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”

(iv) **Notificación de la decisión:** El ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición, porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente. La notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011 (...).” (destacado fuera del original)

²² Sentencias T-377 de 2000, T-661 de 2010, T-208 de 2012, T-554 de 2012, T-556 de 2013, T-332 de 2015, T-483 de 2017, T-223 de 2021, entre otras

²³ Ello no excluye la posibilidad de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario.

por la autoridad y que se sintetizan en la siguiente tabla:

Petición de GEB	Respuesta de la Autoridad	Observación
1. Solicitud Modificación de la Resolución 620 de 2018 Para el movimiento de 3 polígonos autorizados de las torres 77nv, 79nn y 100nv - Sustracción de Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta Río Bogotá, (expediente SRF 395).	Sin emisión del acto administrativo que resuelva la solicitud de sustracción.	Solicitud radicada el 11 de octubre de 2021. Con corte al 30 de abril de 2024, han transcurrido <u>661 días hábiles</u> sin pronunciamiento de fondo.
2. Trámite de Sustracción de 2 sitios de torre. Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta Río Bogotá, requerida para la modificación 2 de la licencia ambiental (expediente SRF 679).	Sin emisión del acto administrativo que resuelva la solicitud de sustracción.	Solicitud radicada el 01 de noviembre de 2022 complementada el 30 de enero de 2023. Con corte al 30 de abril de 2024, han transcurrido <u>321 días hábiles</u> sin pronunciamiento de fondo.
3. Trámite de sustracción de 5 sitios de torre. Reserva Ley 2ª de 1959 Río Magdalena requerida para la modificación de licencia ambiental por restricciones (expediente SRF 649).	Sin emisión del acto administrativo que resuelva la solicitud de sustracción.	Solicitud radicada el 24 de marzo de 2023 con el lleno de requisitos legales. Con corte al 30 de abril de 2024, han transcurrido <u>282 días hábiles</u> sin pronunciamiento de fondo.

Ante la falta de respuesta por parte del MADS, GEB ha impulsado en múltiples ocasiones los trámites sin lograr la resolución de las solicitudes, superando de manera excesiva y no justificada los términos legales establecidos.

Adicionalmente, mediante derecho de petición del 3 de abril de 2024, radicado GEB -000616-2024-S, elevó al MADS las siguientes solicitudes:

1. Información sobre el estado actual de las solicitudes de sustracción de áreas de reserva (Expediente SFR 649, Expediente SFR 395 y Expediente SFR 679) y sobre las causas del retraso en sus pronunciamientos de fondo;
2. Realizar todas las actividades para emitir inmediatamente una decisión de fondo
3. Realizar las actividades necesarias para que el MADS cumpla con los plazos establecidos en la normatividad ambiental para los trámites de sustracción de reserva.²⁴

Establecidos los estándares de respuesta a los que debía sujetarse el MADS y teniendo en cuenta

²⁴ Previamente a la última solicitud referida GEB realizó las siguientes solicitudes: 1) Comunicación ENLAZA ENL-50015028_01101_2023-S del 01 de junio de 2023 (información del estado del trámite de sustracción (expediente SFR649) requerido para la modificación de la licencia ambiental por restricciones del proyecto Sogamoso. 2) Comunicación GEB-50015028_03005_2023-S del 25 de septiembre de 2023 (GEB solicitó información sobre el estado de cuatro trámites de sustracción de los proyectos Norte y Sogamoso). 3) Comunicación al MADS_ Solicitud sustracciones Norte-Chivor. (Correo electrónico del 28 de febrero de 2024, enviado por el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, a la señora Ministra de Ambiente.)

las respuestas suministradas por la autoridad el **17 de abril de 2024** Rad. 21022024E2012013 y el **9 de mayo de 2024** Rad. 21022024E2016241, se evidencia de forma clara la vulneración al fundamental derecho de petición por las siguientes razones:

1. La respuesta del 17 de abril de 2024 no es de fondo: MADS vulneró el núcleo esencial del derecho de petición al no pronunciarse sobre las causas del retraso solicitadas en la petición No. 1 ni se pronunció siquiera sobre la petición No. 3.
2. La respuesta del 17 de abril de 2024 no es eficaz. El MADS nada dice sobre la petición No. 2 ni emite inmediatamente una decisión de fondo y por tanto continúa incumpliendo los plazos establecidos en las Resoluciones 1526 de 2012 y 110 de 2022, para los trámites de sustracción de reserva. Tan es así que semanas después de esa respuesta vaga continúa sin proferir los actos administrativos que resuelvan las solicitudes de sustracción.
3. La respuesta del 09 de mayo de 2024 no es oportuna: MADS respondió la comunicación 2023E1046388 elevada el 04 de octubre de 2023 hasta el 9 de mayo de 2024 superando significativamente el término legal de 10 días hábiles para atender peticiones de información.

De conformidad con lo anterior, en el presente caso: i) Las respuestas del MADS no han sido de fondo ni congruentes. La autoridad se ha limitado a informar de manera general el estado de los trámites sin atender al interrogante que abordaba la causa de los retrasos y sin brindar siquiera una justificación de la mora administrativa. ii) La Autoridad a la fecha no ha resuelto los trámites administrativos de sustracción, los cuales, se reitera, fueron iniciados por GEB con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales, lo que constituye una omisión violatoria del derecho fundamental de petición, al no contarse con una respuesta eficaz, suficiente y oportuna. Ello pone en riesgo la construcción de los proyectos (Norte-Chivor) y UPME 01-2013 (Sogamoso).

La mora en la emisión de los actos administrativos de sustracción vulnera el derecho de petición y adicionalmente el debido proceso. Las sentencias de unificación SU-213 de 2021, SU-235 y SU 426 de 2016, proferidas por la Corte Constitucional, permiten comprender que las actuaciones administrativas iniciadas por los administrados deben ser resueltas de fondo por las Autoridades dentro de los plazos dispuestos para ello y que su omisión vulnera derechos fundamentales. La Corte Constitucional en recientes pronunciamientos, contenidos en las Sentencias T 046 y T 286 de 2023, ha indicado que *la garantía del debido proceso se aplica a toda actuación administrativa* y, en atención a ello “*el debido proceso administrativo debe responder no sólo a las garantías estrictamente procesales, sino también a la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad*”, advirtiendo que “*la mora administrativa se configura cuando se transgrede la garantía del plazo razonable dentro del proceso administrativo, habida cuenta de que este debe desarrollarse sin dilaciones injustificadas o inexplicables (...)*”

4. **REITERACIÓN DE LA SOLICITUD Y PETICIONES DERIVADAS DE LA MISMA.**

Atendiendo a los anteriores argumentos facticos, normativos y jurisprudenciales, solicitamos:

1. Teniendo en cuenta que GEB ha dado cumplimiento a la totalidad de exigencias legales establecidas para la sustracción de reserva, se requiere que el MADS por conducto de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS realice todas las actividades necesarias para que se **emita inmediatamente las decisiones de fondo** a cada una de las solicitudes de sustracción de áreas de reserva mencionadas anteriormente (Expediente SFR 649, Expediente SFR 395 y Expediente SFR 679).
2. Respecto de los siguientes trámites, informar detalladamente lo siguiente:
 - a) Expediente SFR 649: (i) cuáles fases e instancias se han surtido hasta el momento, indicando con exactitud la fecha de inicio y la fecha de fin de su realización, el tiempo que cada una se ha tardado en ejecutarse; (ii) informar los equipos o áreas responsables e (iii) informar y suministrar las actas, correos electrónicos y correspondencia que hayan producido las personas encargadas del trámite que den cuenta de la gestión.
 - b) Expediente SFR 395: (i) cuáles fases e instancias se han surtido hasta el momento, indicando con exactitud la fecha de inicio y la fecha de fin de su realización, el tiempo que cada una se ha tardado en ejecutarse; (ii) informar los equipos o áreas responsables e (iii) informar y suministrar las actas, correos electrónicos y correspondencia que hayan producido las personas encargadas del trámite que den cuenta de la gestión.
 - c) Expediente SFR 679: (i) cuáles fases e instancias se han surtido hasta el momento, indicando con exactitud la fecha de inicio y la fecha de fin de su realización, el tiempo que cada una se ha tardado en ejecutarse; (ii) informar los equipos o áreas responsables e (iii) informar y suministrar las actas, correos electrónicos y correspondencia que hayan producido las personas encargadas del trámite que den cuenta de la gestión.
3. Respecto de los siguientes trámites, informar:
 - a) Expediente SFR 649: Para todas las fases, partes, instancias, etapas relacionadas de este trámite, informe las razones de la extensión de los tiempos en que se ha incurrido, identificando para cada una, el proceso, procedimiento o semejante que reglamenta su ejecución.
 - b) Expediente SFR 395: Para todas las fases, partes, instancias, etapas relacionadas de este trámite, informe las razones de la extensión de los tiempos en que se ha incurrido, identificando para cada una, el proceso, procedimiento o semejante que reglamenta su ejecución.
 - c) Expediente SFR 679: Para todas las fases, partes, instancias, etapas relacionadas de este trámite, informe las razones de la extensión de los tiempos en que se ha

incurrido, identificando para cada una, el proceso, procedimiento o semejante que reglamenta su ejecución.

4. Respecto de los siguientes trámites, informar:

- a) Expediente SFR 649: ¿cuáles fases, partes, instancias, etapas están pendientes de ser realizadas?, indicando con exactitud el equipo o área responsable de la misma.
- b) Expediente SFR 395: ¿cuáles fases, partes, instancias, etapas están pendientes de ser realizadas?, indicando con exactitud el equipo o área responsable de la misma.
- c) Expediente SFR 679: ¿cuáles fases, partes, instancias, etapas están pendientes de ser realizadas?, indicando con exactitud el equipo o área responsable de la misma.

5. Adicional a todo lo anterior, indique para cada trámite lo siguiente:

- a) Expediente SFR 649: ¿Cuándo emitirá una decisión de fondo sobre la solicitud de sustracción de áreas de reserva?
- b) Expediente SFR 395: ¿Cuándo emitirá una decisión de fondo sobre la solicitud de sustracción de áreas de reserva?
- c) Expediente SFR 679: ¿Cuándo emitirá una decisión de fondo sobre la solicitud de sustracción de áreas de reserva?

Queremos insistir en que estos proyectos resultan ser un eje fundamental para la transición energética; sin esta infraestructura, la reconfiguración de la matriz energética hacia las fuentes renovables se frustraría, condenándose a la Región Centro Oriental, para el caso concreto, no solo a riesgos de desabastecimiento, **sino privilegiando las fuentes de generación de altas emisiones en CO2 lo cual resultaría abiertamente inconsistente con los claros propósitos que persigue el actual gobierno en materia de descarbonización.** Una genuina y efectiva apuesta hacia la transición energética, no solo debería implicar agilidad e inmediatez por parte de las autoridades en la resolución de los trámites ambientales que requieren este tipo de proyectos para su ejecución, sino incluso trasciende la discusión a un escenario de flexibilización de barreras normativas diseñadas hace décadas para proyectos de altos impactos ambientales. Hoy las reglas existentes para el diseño de los estudios ambientales están enfocadas en medir los impactos asociados a la ejecución de los proyectos y no en valorar los impactos de no ejecutarlos los cuales resultan muchísimo más significativos para el ambiente y la sociedad.

5. **CONSIDERACIONES FINALES**

Al margen del propósito de esta petición y de las consideraciones anteriormente expuestas, vale la pena hacer énfasis en el interés y el compromiso del Grupo Energía Bogotá con el respeto y la conservación del medio ambiente. Sra. Ministra, puede tener la certeza absoluta de que el GEB hará todo cuanto sea necesario para garantizar que la ejecución de los proyectos de infraestructura lineal que actualmente adelantamos aplican y aplicarán los mejores estándares y prácticas para la preservación del medio ambiente y el respeto de los derechos e intereses de las comunidades y demás grupos de interés que eventualmente pudieran verse afectados. En


este sentido, el GEB está comprometido con la búsqueda e implementación de soluciones constructivas que atiendan en conjunto las necesidades y derechos de las autoridades, las comunidades, los requerimientos del sistema energético y el decisivo compromiso de actuar conforme a los propósitos del Gobierno Nacional en relación con la implementación de la transición energética.

En el mismo sentido, queremos ratificar el sincero compromiso del Grupo Energía Bogotá de trabajar de manera conjunta con las comunidades con intereses en las áreas de influencia de los proyectos que venimos ejecutando. Desde nuestra perspectiva las reuniones que se han venido adelantando con las comunidades se han hecho en los mejores términos y con la mayor cordialidad. Tenemos la seria intención de profundizar en dichas conversaciones atender de manera equitativa el interés de todas las partes. El Gobierno Nacional y en especial los Ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Minas y Energía pueden confiar al cien por ciento en la sinceridad corporativa y el compromiso socio – ambiental de la gestión del GEB; los mismos son pilares de nuestra activa participación en el desarrollo y ejecución de la política energética del Gobierno y de la sostenibilidad de nuestras operaciones, la cual se refleja en el indeclinable propósito de traducir nuestras acciones en oportunidades para el desarrollo y bienestar social de las comunidades.

Entendemos claramente cómo podemos vincularnos a la sostenibilidad de esas comunidades y continuamos con nuestra disposición para hacerlo. No nos cabe duda de que las objeciones y la intención de bloquear la ejecución de algunos de los proyectos que actualmente ejecutamos, no son la expresión de comunidades campesinas o minorías étnicas. Por eso, creemos que debe darse una coordinación interinstitucional con el objeto de evitar que intereses individuales -sea como terceros intervinientes o de otras formas- puedan abusar de sus derechos con el propósito de bloquear y obstaculizar el trámite de los permisos y autorizaciones que se requieren para la ejecución y continuidad de los proyectos de transmisión. En este sentido, Sra. Ministra, reiteramos nuestra disposición con el respecto y la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad de las comunidades y nuestro compromiso para participar y poder invertir en la transición energética del país. La ejecución de los proyectos por parte del GEB puede llevar al país a otro nivel en la agenda de descarbonización y ser un aporte significativo en el camino para la reducción de los precios de la energía.

Recibiré notificaciones en la carrera 9 # 73-44 y en los correos electrónicos notificacionesjudiciales@geb.com.co con copia a nfagua@geb.com.co.

Cordialmente,



NÉSTOR FAGUA GUAUQUE
Vicepresidente Jurídico
Grupo Energía Bogotá S.A. ESP

CC. Juan Ricardo Ortega – Presidente GEB correspondencia@geb.com.co

CC. Andrés Camacho Morales - Ministro de Minas y Energía menenergia@minenergia.gov.co

